

DE LA RECONCILIACIÓN NACIONAL A LA CRISIS DE LA TRANSICIÓN

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PCE (II)

Francisco Erice Sebares



EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PCE (II)
**DE LA RECONCILIACIÓN NACIONAL
A LA CRISIS DE LA TRANSICIÓN**

por

FRANCISCO ERICE SEBARES

Profesor Titular de Historia Contemporanea
de la Universidad de Oviedo



Comité Federal
Secretaría de Formación

Estos materiales han sido editados para su distribución. La intención de los editores es que sean utilizados de la forma más amplia posible, adquiridos originales permitiendo así nuevas ediciones y, en caso de reproducción, esperamos se haga constar el título y la autoría de la edición

Edita:

Partido Comunista de España

Secretaría de Formación

correo-e: formacion.debate@pce.es

C/ Olimpo 35, 28043, Madrid

Página web: www.pce.es

Maquetación: Secretaría de Comunicación / PCE

Primera edición: julio 2012 [1000 ejemplares]

Segunda edición: noviembre 2013 [1000 ejemplares]

ISBN: 978-84-87098-55-0

Depósito legal: M-30981-2013



Frans Masereel

Ilustración para cubierta de la
edición del Manifiesto Comunista
[1914-1919]

El giro táctico de 1956 y la Política de Reconciliación Nacional.

En el momento en que se producía la definitiva ruptura con la táctica guerrillera, la situación general del PCE no podía considerarse precisamente halagüeña. Para agravarla aún más, en septiembre de 1950, el Partido español era ilegalizado en Francia, viéndose arrojado a la semiclandestinidad en un territorio que constituía la mejor plataforma para actuar dentro de España. La dirección se veía obligada a dividirse, desplazándose mayoritariamente a Praga y quedando en París el aparato de relaciones con el interior, encabezado por Santiago Carrillo.

Las dificultades de la reconversión hacia el uso de tácticas *legales* o de infiltración en las estructuras sindicales del régimen eran evidentes, tanto por la represión de la dictadura como por las explicables reticencias de los militantes. Las elecciones sindicales de 1954, las primeras en las que se aplica el *entrismo* de manera más o menos organizada, aunque a pequeña escala, se saldaron con apenas algún resultado positivo en Madrid o Barcelona. Un estímulo esperanzador era, en todo caso, la aparición esporádica de las primeras comisiones de obreros de diferentes tipos que, frente a la visión tradicional que suele manejarse, eran ya saludadas, en fecha tan temprana como 1954, desde las páginas de *Mundo Obrero*, que además pronto comenzó a lanzar consignas en favor de su constitución.

Otros signos tímidamente alentadores fueron los progresos en el trabajo entre los intelectuales y la voluntad de superación de los viejos errores que alentaba en documentos como la Carta del Comité Central en julio de 1952, llamando a primar la lucha en el interior y a superar el sectarismo. El interés especial por atraer a los intelectuales al Partido conseguirá incorporar, por estos años, a un apreciable número de escritores o cineastas; trabajo éste que se intentaba reflejar y potenciar con el “Mensaje a los intelectuales patriotas” de 1954. Todas estas iniciativas, primeras plasmaciones del nuevo rumbo emprendido, cristalizarían en el V Congreso, celebrado

en Praga a finales de 1954, primero desde el histórico de Sevilla de 1932.

El V Congreso representa todavía un momento de transición. Por una parte, mantenía la visión catastrofista en sus análisis sobre el Franquismo, al que consideraba a punto de desmoronarse, y reafirmaba la vieja propuesta de alianzas, en forma de un Frente Nacional Antifascista que implantaría un gobierno provisional revolucionario y abriría paso a la *revolución democrática* inconclusa. Pero, sobre todo, consolidaba la apuesta por la infiltración en el aparato sindical y las estructuras de masas del régimen (que incluso se incorporó a los Estatutos) y sugería la necesidad de un acercamiento a los obreros no comunistas, especialmente los católicos. Por otra parte, el congreso refrendaba oficialmente, en la función de Secretaria General, a Dolores Ibárruri, a la vez que consolidaba el ascenso de la generación de dirigentes procedentes de las Juventudes Socialistas Unificadas (Santiago Carrillo, Fernando Claudín, Ignacio Gallego, etc.) o ligados al trabajo del interior (como Simón Sánchez Montero).

Empezaban ya a notarse los nuevos aires del movimiento comunista internacional tras la muerte de Stalin (en 1953), pero sobre todo, en lo que se refiere al PCE, destacaba el dinamismo de esa nueva generación, criticando ante los veteranos (como hacía Claudín ante Vicente Uribe) el anquilosamiento y el bajo nivel político-ideológico en la organización. También se incrementaron los esfuerzos de propaganda, y en enero de 1955, Radio España Independiente (conocida como *La Pirenaica*) dejaba de transmitir desde Moscú trasladándose a Bucarest, iniciando pronto su etapa de máximo esplendor, en la que se convertiría en un instrumento excepcional de difusión ideológica e información alternativa de la realidad española.

Sin embargo el gran *giro táctico* no llegaría hasta 1956, aunque no puede entenderse sin los cambios que venían produciéndose en años anteriores. Entre estos antecedentes estaban, sin duda, la percepción creciente, en la dirección del PCE, de que estaban surgiendo nuevas fuerzas desligadas del régimen o en oposición al mismo en el interior; las propuestas, más

concretas, de colaboración a los católicos; o los llamamientos de Dolores y otros dirigentes, en la prensa del Partido, a la “convivencia entre los españoles”, anunciando una política de brazos abiertos hacia quienes abandonaran el Franquismo, y procurando atraer hacia la democracia “a aquellos que están deseando abandonar las banderas franquistas, sin preguntarles cómo pensaban ayer, sino cómo piensan hoy y qué quieren para España”.

Un primer elemento significativo que servía para fundamentar las nuevas propuestas lo constituían las transformaciones de la sociedad española. Generaciones jóvenes, de obreros y estudiantes, se incorporaban a la protesta, al compás de los cambios económicos que tenían lugar en el país; luchadores que no habían vivido la guerra y que, en ocasiones, procedían incluso familiarmente del bando de los vencedores. También iban surgiendo nuevas formaciones políticas, generalmente cristalizadas en los años siguientes, integradas por ex-falangistas (como Dionisio Ridruejo) y luego por socialistas del interior (como la Asociación Socialista Universitaria, ASU) o grupos de una *nueva izquierda* predominantemente intelectual o estudiantil (como el Frente de Liberación Popular, FLP). Esta efervescencia estimulaba la posibilidad de forjar alianzas novedosas frente a la dictadura. El PCE supo percibir, en lo inmediato, la importancia de estos cambios, si bien los insertó en un análisis general catastrofista y con fuertes dosis de voluntarismo, presentando al Franquismo como un régimen endeble apoyado tan sólo por los terratenientes y la burguesía monopolista, ligados al imperialismo norteamericano, frente al rechazo de obreros, campesinos, capas medias e incluso la burguesía no monopolista.

El segundo factor influyente fue, sin duda, el representado por los cambios dentro del Partido, que a veces se han simplificado como el predominio creciente, en la dirección, de los *jóvenes* sobre los *veteranos*. Pero, más allá de esta circunstancia, estaba la reanimación que experimentaba el PCE desde comienzos de la década y los tímidos, pero perceptibles, avances de su implantación entre obreros e intelectuales.

El tercer factor determinante fueron los cambios en el movimiento comunista internacional, con la muerte de Stalin y los comienzos de la desestalinización. El XX Congreso del Partido Comunista de la URSS (febrero de 1956), con su *Informe Secreto* sobre Stalin y el *culto a la personalidad*, sus análisis sobre la posibilidad de vías diversas al socialismo o sus propuestas de *coexistencia pacífica*, venía a confirmar las tendencias ya apuntadas en los análisis y las prácticas del PCE.

En lo inmediato, la formulación de la nueva propuesta siguió a otras manifestaciones más o menos llamativas, como la controvertida aceptación del ingreso de España en la ONU, a finales de 1955. Pese a haber sido admitida por la URSS, la entrada de España en la organización internacional suscitó un fuerte rechazo por una parte de la dirección del PCE y sólo una arriesgada iniciativa de Carrillo y su grupo de colaboradores más inmediato, que estuvo a punto de provocar una crisis en el Partido, consiguió que fuera finalmente asumida como un paso positivo.

Pero, sobre todo, la coyuntura en la que surge la propuesta política *reconciliadora* estaba marcada por las impactantes movilizaciones estudiantiles de febrero de 1956 y –en menor medida– por los conflictos obreros en la primavera de ese mismo año. En junio, el Buró Político aprobaba su declaración “Por la Reconciliación Nacional. Por una solución democrática y pacífica del problema español”, que el Pleno del Comité central celebrado en julio-agosto acabó de refrendar. En el citado pleno, por cierto, el equipo más próximo a Carrillo (Santiago Álvarez, Simón Sánchez Montero, Tomás García, Jorge Semprún, Fernando Claudín...) pasaba a controlar un órgano fundamental de dirección como era el Buró Político.

La propuesta de la Reconciliación Nacional (RN) partía de la necesidad de superar la barrera divisoria generada entre los españoles por la Guerra civil, estableciendo las bases para la futura solución pacífica de los problemas del país. Para deshacer equívocos, dado que el término usado para definirla podía provocar rechazos entre la militancia y gozaba de mala

prensa en el movimiento comunista, se subrayaba que en modo alguno se estaba hablando de “reconciliación de clases”. En todo caso, el texto consideraba que el Franquismo, instrumento de la oligarquía monopolista, se encontraba fuertemente aislado, por lo cual se hacía cada vez más urgente -y también más factible- llegar a amplios acuerdos, con criterios muy flexibles y sin fórmulas preconcebidas, con otras fuerzas políticas y sociales, para alcanzar las libertades democráticas y la “independencia nacional”.

La RN tenía la pretensión de romper el aislamiento al que el resto de los grupos de oposición, plegándose a la política de *guerra fría* o aferrándose a su tradicional anticomunismo, sometían al PCE. Pero, sobre todo, dada la escasa presencia en la lucha interior de estas otras fuerzas de la izquierda histórica, pretendía facilitar el acercamiento a los nuevos focos de descontento que iban surgiendo en España, pronto alentados por los efectos económicos del **Plan de Estabilización** y los inicios del desarrollismo. En particular, era visible el intento de aproximación a los católicos -cuya importancia en la lucha antifranquista comenzaba a entreverse- y a las nuevas formas de acción obrera que empezaban a surgir. La vaguedad de la propuesta permitía además múltiples lecturas, y de hecho la consigna de la *reconciliación* se terminaría convirtiendo, como se ha señalado, en la ilustración más significativa de la *hoja de ruta* de la política del Partido hasta la Transición. En el frente internacional, la aceptación del viraje se garantizaba con el apoyo a la política desestalinizadora y liberalizadora de Kruschev, pero también a algunas de sus medidas más controvertidas, como la intervención en Hungría en el mismo año de 1956.

El cambio se extendió asimismo, como cabía esperar, al ámbito específico de Cataluña. En agosto de 1956, el PSUC celebraba su primer congreso, cerrando definitivamente las heridas abiertas con la crisis que, unos años antes, diera lugar a la expulsión de su Secretario General, Joan Comorera. Ahora, bajo la dirección de Josep Moix y Gregorio López Raimundo, el partido de los comunistas catalanes aceptaba la RN, asumiendo el *hecho nacional* catalán e incorporando a su dirección a lo más significa-

tivo de la nueva militancia obrera e intelectual (Cipriano García, Manuel Sacristán, Francesc Vicens).

La apuesta por el giro táctico era, sin duda, arriesgada. Había que vencer, entre otras cosas, las reticencias de una parte de la militancia terriblemente golpeada por la represión y cambiar arraigados hábitos de trabajo. No parece, sin embargo, que costara mucho conseguirlo, y lo cierto es que la apertura hacia las nuevas realidades del país se fue logrando con un éxito más que notable. Por ejemplo, al compás de los movimientos huelguísticos de 1956-58 y de las elecciones sindicales de 1957, se iba perfilando una estrategia en el movimiento obrero de aprovechamiento de los cauces legales y de apoyo y estabilización de las comisiones de obreros que iban formándose en diferentes lugares del país. Para ensamblar ambas actividades (apoyo a las comisiones y coordinación de los cargos obtenidos mediante la infiltración en el Sindicato vertical), se pondría en marcha la denominada Oposición Sindical u Oposición Sindical Obrera, concebida no como un sindicato más sino como un instrumento operativo en la dirección mencionada. Con una práctica sindical que pronto rendirá evidentes frutos, el PCE se esforzaba en ligar su acción a la defensa de las reivindicaciones básicas de los trabajadores, tales como las aprobadas por el III Congreso Sindical de la OSE: jornada de 8 horas, salario mínimo vital o principio de igual salario por igual trabajo. Para coordinar el trabajo en el movimiento obrero e intercambiar experiencias, en enero de 1959, tenía lugar en París una reunión de cuadros políticos y sindicales del interior y del exterior, en una práctica que se repetirá luego con cierta frecuencia.

Tampoco se descuidó el trabajo entre los intelectuales, que ofrecía buenas perspectivas. En 1957, bajo el impulso de Jorge Semprún, encargado de dirigir las actividades en este campo, aparecía la revista *Nuestras Ideas*, que entre otras cosas apoyaba el realismo social característico de los creadores artísticos del interior.

Otro frente de lucha importante, muy vinculado a la idea misma de

la RN, era la batalla por la amnistía, que movilizó a sectores amplios del Partido y su entorno, y que contó con una importante participación de mujeres. A fines de los años 50, el número de presos políticos en España era muy elevado; entre ellos, más de las cuatro quintas partes eran comunistas. Muchos cumplían aún condena por causas derivadas de la Guerra civil o de la participación (como combatientes directos o colaboradores) en la guerrilla. Otros se iban incorporando tras las sucesivas *caídas* sufridas por la organización en estos años de reactivación militante, en un momento en el que el régimen afilaba sus instrumentos represivos, con cambios legales como la creación del Tribunal Especial de Actividades Extremistas en 1958. Las detenciones, torturas y consejos de guerra saldados con largas condenas eran, por entonces, habituales. Los desmantelamientos de direcciones en Cataluña, Asturias, Vizcaya o Valencia, o las detenciones masivas con motivo de huelgas u otras razones (por ejemplo, la asistencia al Festival Mundial de la Juventud celebrado en Moscú en 1957), son algunos ejemplos destacados.

Pese a estas dificultades, en los años siguientes, los avances organizativos y de implantación, junto con la reactivación de las movilizaciones obreras, vinieron a confirmar, a juicio de la dirección del Partido, la justeza de la nueva línea. El PCE *nacionalizaba* su política, adecuaba su mensaje a la sensibilidad de los sectores militantes emergentes y abría espacios de influencia en la sociedad. Las esperanzas suscitadas llevaron incluso a la aventurada convocatoria de sendas jornadas de huelga a escala nacional y a fecha fija: la Jornada de Reconciliación Nacional (5 de mayo de 1958), en solitario, y la Huelga Nacional Pacífica (18 de junio de 1959), con el apoyo de otros pequeños grupos. La repercusión de dichas convocatorias fue bastante limitada, reflejando el excesivo voluntarismo presente en los análisis del Partido y la fortaleza de un régimen que, a diferencia de lo que se planteaba, no estaba precisamente aislado y agonizante. A partir de esta constatación, aunque no se abandonará nunca la idea de una *huelga general política* a fecha fija para acabar con el régimen, se apostará más

por la extensión de los conflictos como una *mancha de aceite*, táctica que las huelgas de 1962 y 1963 vendrían a avalar. Pese a ello y a las fuertes secuelas represivas que las convocatorias de *jornadas* en 1958 y 1959 provocaron, la valoración de las mismas fue bastante triunfalista, hasta el punto de acelerar, por desacuerdo con la segunda convocatoria, la dimisión de Dolores como Secretaria General. No obstante, pese a su fracaso, estos esfuerzos contribuyeron, entre otras cosas, a evitar la repetición en el futuro de los mismos métodos, a paliar un aislamiento que las maniobras de otras fuerzas de la izquierda en el exilio pretendían, y a ir cimentando un prestigio del PCE como fuerza antifranquista por antonomasia que atraería luego a muchos militantes.

A la altura de 1959, cuando se cumplían veinte años del final de la Guerra civil, el Partido podía exhibir, sin duda, una presencia activa en el interior del país incomparablemente más sólida que cualquier otro grupo del antifranquismo. Era también el momento de echar la vista atrás, a lo cual quería contribuir la *Historia* oficial del Partido presentada al año siguiente, elaborada por una comisión del Comité Central presidida por Dolores Ibárruri. El texto, reconocido como provisional por sus propios autores y con evidentes dosis de sectarismo, servía al menos para anclar al PCE en la memoria de su pasado y evitar que se interpretara la RN como una forma de olvido.

La Política de Reconciliación Nacional fue, en todo caso, reafirmada de manera inequívoca en el VI Congreso (diciembre de 1959-enero de 1960), en el que Santiago Carrillo sucedía a Dolores Ibárruri en la Secretaría y se incorporaba la dirección a una apreciable hornada de nuevos dirigentes presentes en la lucha en el interior del país. El antiguo Buró españolizaba su nombre y se transformaba en Comité Ejecutivo, impulsándose como órgano de dirección eficaz el mortecino Secretariado del Comité Central. El partido afirmaba tener, entonces, 12.000 militantes en el interior y 10.000 en el exilio, cifras tal vez algo exageradas.

El congreso, además, dedicó una parte importante de sus deliberaciones al nuevo movimiento obrero, abogando, de manera bastante lúcida, por la estabilización de las comisiones y la profundización de la táctica *entrista* en el Sindicato vertical, la ofensiva por los salarios y derechos de los trabajadores, y la preparación de un futuro sindicato unitario, democrático, independiente y con base en las empresas. En la política de alianzas, se abandonaba definitivamente la fórmula del Frente Nacional y del gobierno provisional revolucionario, insistiendo en una propuesta unitaria de tono moderado, con un programa mínimo de amnistía, autodeterminación de nacionalidades –pero con defensa de un Estado único-, rechazo de las bases norteamericanas, reforma agraria limitada o medidas antimonopolísticas. Se apostaba asimismo por convertir al PCE en un partido de masas, a pesar de “las limitaciones inherentes a nuestra situación de clandestinidad”, y por una vía democrática de avance hacia el socialismo a través de una primera fase de revolución anti-feudal y antimonopolista y una segunda etapa propiamente socialista.

Como signo de que la tarea no iba a resultar fácil, los 60 delegados del interior pagaron un alto precio por su asistencia al congreso. Al regreso a España, como consecuencia de la labor policíaca de un infiltrado, muchos de ellos fueron detenidos, procesados y condenados a largas penas de cárcel.

El Partido del antifranquismo.

Entre el VI y el VIII Congreso (1960-1972), el PCE terminó por convertirse en *El Partido* por excelencia de la lucha antifranquista. Era, en parte, la consecuencia de su voluntad de configurarse como un partido de amplia base. Este propósito, tal como se plasma por ejemplo en la Resolución del Comité Ejecutivo de abril de 1967 “Por un partido comunista de masas para acelerar la transición a la democracia”, implicaba actuar en los movimientos sociales incorporando los objetivos específicos y las reivindicaciones particulares de cada uno de ellos y asumiendo los riesgos

revista de investigación marxista

PAPELES

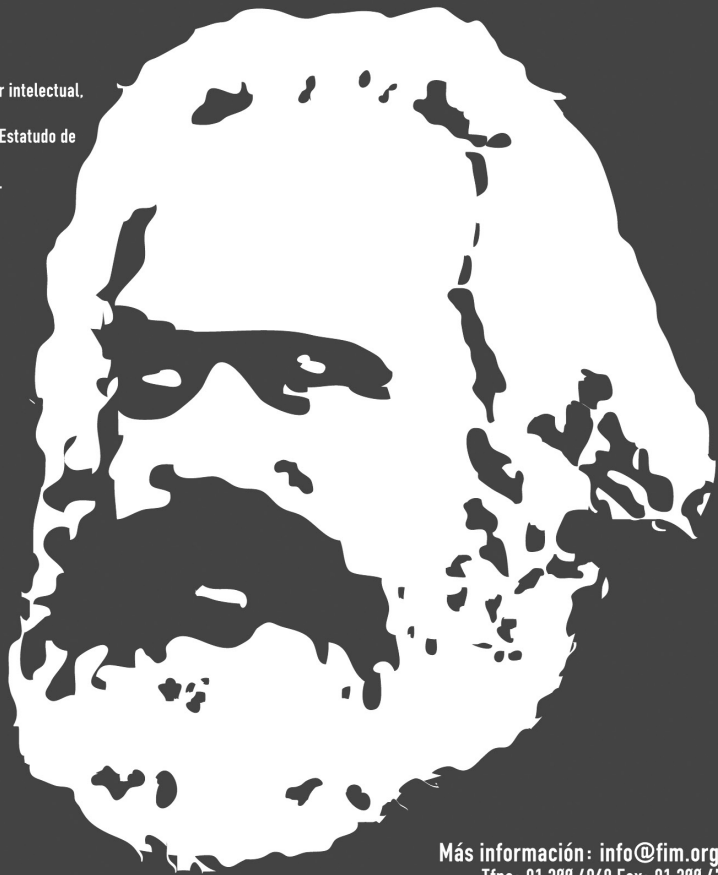
de la FIM

Últimos números publicados:

No.25 ¿Para quién trabajamos? El trabajador intelectual, cultura y comunicación.

No.26/27 La clase trabajadora, después del Estatuto de los trabajadores y sus reformas.

No.28 La Ciencia en la II República española.



Más información: info@fim.org.es
Tfno: 91 300 4969 Fax: 91 300 47 44

www.fim.org.es

FIM



Fundación de
Investigaciones
Marxistas

que generaba un funcionamiento lo más abierto posible, ensanchando así los límites de la legalidad.

El que estos propósitos condujeran a la clara hegemonía del PCE en el antifranquismo se debía, en todo caso, a una serie de factores combinados. Uno de ellos era la continuidad en su dirección y su línea política, incluyendo la relación bastante fluida y eficaz –pese a algunas distorsiones– entre exilio y organización en el interior. La relativa autonomía de la acción cotidiana de los comunistas en los frentes de masas, que los anclaba firmemente en la realidad, no impidió un funcionamiento acorde con los criterios generales que fue diseñando la dirección del Partido, siempre en el marco genérico de la Política de Reconciliación y su desarrollo flexible y con gran capacidad de atracción en la sociedad española. Los propios cambios en la dirección del Partido permitieron incorporar a destacados militantes y activistas del interior; en el Comité Central elegido en el VIII Congreso, sólo 28 de los 118 miembros vivían ya fuera del país.

También contribuyeron a los progresos en la implantación factores tales como la eficacia de la propaganda, gracias especialmente a las emisiones de la mítica *Pirenaica*, de amplia audiencia entre el antifranquismo en general. Y, por supuesto, la fuerte vitalidad de la militancia, frente a la inacción o la impotencia de otras fuerzas históricas de la izquierda. Es cierto que este activismo era compartido por diversos sectores de la oposición interior, especialmente los nacionalistas radicales vascos, los católicos y otros grupos izquierdistas que también reclamaban para sí la identidad comunista. Pero frente a estos últimos, la política y la práctica del PCE ofrecían algunas ventajas indudables: su mayor realismo, sus firmes anclajes en el movimiento obrero y otros movimientos sociales, el prestigio ya histórico que le proporcionaba un capital humano de heroísmo y sacrificio, y la firme voluntad de buscar espacios legales aun a costa de sufrir los zarpazos de la represión.

Esta tendencia al crecimiento, aunque no alterada en lo esencial, se vio

afectada por altibajos relacionados con las coyunturas políticas y económicas del período, los efectos de la represión o las propias crisis internas. La represión se cebó una y otra vez con los comunistas, pero sin que las *caídas* tuvieran ya efectos catastróficos de desmantelamiento de la organización más allá de lo local, incluso en momentos de fuertes conflictos o, por ejemplo, con el recrudecimiento de las acciones policiales y los estados de excepción de 1969 y 1970. Sólo entre 1961 y 1964, según datos oficiales, la Brigada Político Social practicó unas 1.500 detenciones entre opositores catalogados como comunistas, cantidad muy superior a la de cualquier otra fuerza política o sindical; pero estas cifras son muy inferiores a la realidad y no contemplan a los detenidos específicamente por motivos laborales, comunistas también en su mayoría. A finales de 1962 fue arrestado Julián Grimau, torturado y fusilado, tras un proceso-farsa, el 20 de abril de 1963, en medio de fuertes protestas internacionales. El Tribunal de Orden Público condenó, entre 1967 y 1976, a 920 procesados por su condición de comunistas y 847 más –también comunistas en su mayoría– como miembros de Comisiones Obreras. De las sentencias del Tribunal Supremo en esos mismos años contra opositores al régimen, el 37% fueron contra los considerados militantes del PCE y un 25% contra miembros de Comisiones Obreras. Los comunistas pagaron también un elevado precio en la represión contra Comisiones Obreras desde 1967, la desencadenada durante el estado de excepción de enero de 1969, o en las campañas de solidaridad con los miembros de ETA implicados en el Proceso de Burgos en diciembre de 1970.

Otro factor potencialmente negativo fueron las crisis y escisiones que sufrió el Partido en los años 60 y el surgimiento de grupos de la llamada *nueva izquierda* que pretendían disputarle el espacio comunista, criticando al PCE como *revisionista* o *reformista*. En 1963, el conflicto chino-soviético ocasionó la segregación de un grupo pro-chino, que daría lugar al PCE marxista-leninista (PCE-ML), pero que apenas afectó a algunos militantes de la emigración en Suiza o Francia, y a unos cuantos estudian-

tes en el interior. Tampoco la crisis en la cúpula dirigente que se saldó en 1965 con la expulsión de Claudín y Semprún generó excesivos apoyos a los disidentes, salvo casos muy contados de intelectuales en Cataluña y parte de la organización estudiantil madrileña. Mayor peligro potencial tenían las discrepancias con la condena del PCE a la intervención de tropas del Pacto de Varsovia para sofocar la denominada **Primavera de Praga**, teniendo en cuenta la fuerte identificación política y sobre todo sentimental de la militancia con la Unión Soviética. Sin embargo los nuevos grupos disconformes, el de Eduardo García y Agustín Gómez (el PCE-VIII Congreso) o el de Enrique Lister (el Partido Comunista Obrero Español, PCOE) no fueron capaces de absorber más que una parte mínima de ese descontento, y la inmensa mayoría de los discrepantes permanecieron en las filas del PCE.

En cuanto a los grupos izquierdistas (trotskistas, maoístas, etc.), no siempre surgieron del entorno del PCE, partiendo en otras ocasiones de círculos católicos progresistas o del nacionalismo radical. En todo caso, solían tomar como referente negativo al PCE, con el que compitieron seriamente en el movimiento estudiantil y, con menos éxito –salvo ejemplos locales– en el movimiento obrero o las asociaciones vecinales y ciudadanas.

Fue precisamente la implicación en los movimientos sociales lo que proporcionó su arraigo y su fuerza al PCE, modificando de paso la misma fisonomía del Partido. Dentro del movimiento obrero, los comunistas del PCE se convirtieron en la principal fuerza vertebradora de las Comisiones obreras, a las que proporcionaron liderazgos y recursos organizativos, a la vez que contribuían decisivamente a perfilar sus rasgos definitorios: carácter sociopolítico y no meramente sindical a la manera tradicional; principios democráticos y abiertos; independencia con relación a las fuerzas políticas, y vocación unitaria. A la inversa, la conflictividad obrera desde 1962 alimentó, más que ningún otro factor, el desarrollo del PCE y su capacidad de presión contra la dictadura. Y aunque las Comisiones eran, por principio, autónomas con respecto a los partidos, la mayor presencia

del PCE y, sobre todo, la represión policial después de 1967, forjaron una dependencia que tendría en el futuro algunas consecuencias importantes.

En el movimiento estudiantil, el PCE y el PSUC participaron activamente, como fuerzas dominantes o muy destacadas, en las iniciativas desarrolladas desde 1961 para acabar con el monopolio del Sindicato Español Universitario (SEU), la estructura falangista de encuadramiento estudiantil, y crear un movimiento sindical democrático en las universidades. En 1961 surgió la Federación Universitaria Democrática Española (FUDE), que fue extendiéndose a distintos lugares del país. Desde 1965, se producía la liquidación del SEU y el fracaso de las alternativas ensayadas por el régimen para sucederlo. Por el contrario, surgió un Sindicato Democrático de Estudiantes que, desafortunadamente, no duró mucho. Desde 1969, se iniciaba un cierto reflujó de las acciones estudiantiles, reanudadas en los años 70 de manera distinta y con fuerte competencia de los grupos izquierdistas. En cualquier caso, el movimiento estudiantil, más allá de sus virtualidades concretas, se convirtió en una relevante cantera de cuadros para el Partido y sus movimientos de profesionales, de mujeres, etc.

La presencia comunista contribuyó asimismo al desarrollo de nuevos movimientos culturales y ciudadanos. Las asociaciones culturales impulsadas por fuerzas opositoras, especialmente el PCE, desarrollaron desde la segunda mitad de los años 60 una interesante labor ideológica y de difusión de una cultura crítica, pero también de dinamización social en barrios y ciudades, proporcionando, pese al acoso o al control policial, ámbitos restringidos de *salida a la legalidad* y ofreciendo a veces una retaguardia protectora a la organización política. En cuanto a los movimientos ciudadanos, tales como las asociaciones de vecinos, llegaron a adquirir un fuerte impulso como respuesta a las secuelas sociales del crecimiento urbano caótico de las ciudades en la etapa del desarrollismo. La lucha por equipamientos y mejoras sociales en los barrios unieron en estas asociaciones a comunistas con católicos o militantes de otros grupos de izquierdas, actuando no sólo como lugares de agitación o protesta, sino también como

escuelas de aprendizaje de formas democráticas y asamblearias.

El PCE no solamente fue capaz de intervenir en estos movimientos y dinamizarlos, sino que intentó también activar su presencia en ámbitos juveniles, reconstruyendo a esos efectos, a partir de 1962, la Unión de Juventudes Comunistas (UJC). La participación creciente de las mujeres (militantes y esposas o familiares de militantes) en actividades de solidaridad con los presos o represaliados, e incluso en tareas de apoyo con motivo de algunas huelgas (como sucedía en las cuencas mineras asturianas) movió a la dirección del Partido a buscar fórmulas de expresión y encauzamiento de estas actividades, para lo cual se constituyó, en 1965, el Movimiento Democrático de Mujeres, no como estructura partidaria, pero con amplia hegemonía de las comunistas. El MDM intentó combinar una parte de esas tareas asistenciales o de solidaridad tradicionalmente adjudicadas al colectivo femenino, con un planteamiento específico de los problemas que afectaban a las mujeres, especialmente obreras o de los sectores populares, sin manejar, al menos en sus primeras etapas, un repertorio de conceptos o una sensibilidad que pudiera calificarse de feminista. Por ejemplo, algunas de estas mujeres comunistas se infiltraron en las franquistas asociaciones de amas de casa, intentando darles un tono formativo y reivindicativo. Además de ello, la integración de mujeres en la militancia del PCE también se realizó por otros caminos, a través del movimiento estudiantil o de profesionales (abogadas, profesoras, etc.).

Precisamente la proyección del PCE sobre colectivos de profesionales de formación universitaria representó uno de los grandes éxitos del Partido, dando lugar nada menos que a la acuñación de un nuevo concepto central en la estrategia del PCE: el de *fuerzas de la cultura*. Dentro de los grupos organizados en este sector, destacaron desde el primer momento los abogados, por su labor de apoyo a los presos y procesados políticos y luego a los trabajadores y al movimiento obrero. Ya a finales de la década de los 50, funcionaba en Madrid un grupo de abogados comunistas, así como una Asociación de Abogados Jóvenes que actuaba como pantalla para-legal.

Luego, en la segunda mitad de los años 60, se establecieron los primeros despachos de abogados laboristas, mientras los letrados comunistas –y algunos otros demócratas- defendían con tesón y evidentes dificultades a los procesados por el TOP. Destacó asimismo la actuación de los abogados progresistas –y los comunistas en especial- en la lucha por la democratización de la justicia, a través de asambleas o encierros de protesta, plantas ante los jueces, escritos de denuncia e incluso la presentación de candidaturas para la dirección de los colegios profesionales. Uno de los mayores éxitos del grupo de letrados comunistas fue, en 1970, conseguir transformar el IV Congreso Nacional de la Abogacía, celebrado en León, en un foro de debate y protesta, con la aprobación de resoluciones en favor de la amnistía o contra la existencia de **jurisdicciones especiales**.

En definitiva, el PCE fue convirtiéndose en un elemento dinamizador de la sociedad civil, impulsando los movimientos sociales a partir de sus reivindicaciones concretas e insertándolos en la lucha contra la dictadura y por la consecución de la democracia. ¿Hasta qué punto los éxitos cosechados respondían no sólo a una práctica cotidiana realista y apegada al terreno, sino también a una concepción general, táctica y estratégica, adecuadas? Ante todo, cabe decir que si algo caracterizó la evolución de las propuestas del PCE desde la formulación de la RN es su clara continuidad. El *giro táctico* de 1956 constituye el marco a partir del cual se van definiendo las propuestas políticas, sistematizadas en los congresos (1960, 1965 y 1972) y en los sucesivos informes y resoluciones de la dirección, a menudo publicados en forma de libro o folleto y casi siempre con la firma de su Secretario General, Santiago Carrillo: *¿Después de Franco, qué?*, *Nuevos enfoques de los problemas de hoy*, *La democracia económica y política*, etc.

El primer supuesto que caracteriza esta propuesta es la prioridad de la lucha por la democracia, facilitando para ello una amplia alianza de las fuerzas contrarias a la dictadura, desde las representativas del movimiento obrero a las de la derecha democrática. Eso significaba considerar que la

“burguesía monopolística española”, concebida como el principal soporte del régimen, está incapacitada, por tradición e intereses, para diseñar una salida democrática al Franquismo. En 1969, tras la designación de Juan Carlos para suceder al Caudillo, esta propuesta de alianza se formulaba bajo la denominación de *Pacto para la Libertad*: “frente al nuevo acto de poder personal de Franco, la solución está en la convergencia de todas las fuerzas lesionadas por la tiranía en un pacto para la libertad”.

El segundo supuesto era la posibilidad de un cambio pacífico, logrado a través de la movilización de masas, que desembocaría en una Huelga Nacional Política, luego denominada *acción democrática nacional*. El resultado sería un sistema postfranquista en el que el PCE se comprometía a respetar el pluralismo político e incluso a hacer importantes concesiones a la Iglesia católica..

El tercer rasgo de esta propuesta era la posibilidad de avance hacia la transformación social por vías democráticas. La caída del régimen no abocaría directamente al socialismo, pero abriría paso a una *democracia política y social*, fase intermedia para el acceso a una sociedad emancipada concebida también sobre bases pluripartidistas y con el mantenimiento y reforzamiento de las libertades. Para progresar en esta vía, como proyecto estratégico, los documentos del PCE esbozaban las premisas de un nuevo bloque que ya no se definía a la manera clásica (por ejemplo, como “alianza de obreros y campesinos”), sino como la confluencia de “las fuerzas del trabajo y las fuerzas de la cultura”. La valoración de la importancia de este nuevo sector (las *fuerzas de la cultura*) no ya como un aliado táctico de cara a la reconquista de las libertades democráticas, sino en la estrategia de transición al socialismo, partía de los cambios en los intereses y la revalorización del papel de este sector que se atribuían a la llamada revolución científico-técnica.

La condena de la intervención soviética en Checoslovaquia en 1968 pretendía dar credibilidad a este planteamiento de socialismo en libertad.

A partir de ese momento, el Partido iniciaba un proceso de distanciamiento de la URSS y de los regímenes del *socialismo real* pero sobre todo, de manera inmediata, veía justificada su defensa de las *vías nacionales* particulares al socialismo y una diversificación de las relaciones con otros países socialistas (China, Corea del Norte, Rumanía). En cuanto al papel atribuido a las *fuerzas de la cultura*, también encajaba perfectamente con las esperanzas albergadas en el PCE por los acontecimientos de Mayo del 68. El Pleno ampliado del Comité Central de agosto de 1970, en el que se expulsó a Líster y se renovaron fuertemente los órganos de dirección, además de abordar otros temas candentes (como la *cuestión nacional* en el Estado español), enfatizó la idea del Pacto para la Libertad y de la Alianza de las Fuerzas del Trabajo y de la Cultura.

Este diseño del futuro necesitaba ser sometido, para demostrar su validez, a la prueba de la práctica, por lo cual no llegarían a detectarse algunas de sus debilidades antes del momento mismo de la Transición. Ciertos elementos del análisis, sin embargo, reflejaban una fijación en el pasado poco acorde con los cambios de la sociedad española, como lo referente a los vestigios feudales o la *revolución democrática* pendiente, que en todo caso fueron puliéndose con el tiempo. En cuanto a las previsiones de futuro, uno de estos puntos débiles era la suposición de que, en definitiva, las fuerzas sustentadoras del Franquismo eran incapaces de evolucionar hacia posiciones *democráticas*, asunto que representó precisamente uno de los motivos de discrepancia de Claudín y Semprún. Claudín defendía, *grosso modo*, que el franquismo era el régimen de toda la clase dominante, y que existían claras posibilidades de que una parte de la misma aceptara una solución democrática formal siempre que no se cuestionara el sistema económico, y que por tanto en España, a la caída de la dictadura, pudiera establecerse una democracia capitalista como la de otros países europeos.

Desde luego, las dificultades teóricas no parece que fueran esenciales en estos momentos para el avance o el estancamiento del Partido, ya que remitían a la prueba de la práctica en el futuro. Había, en cambio, otros

factores de debilidad más operativos en estos años, como la desigual implantación territorial, sectorial e incluso de género (escasa presencia de mujeres). O también la progresiva coexistencia de una cultura comunista tradicional hecha de valores férreamente asumidos por la vieja militancia (sacralización extrema del partido, fidelidad a ultranza a la URSS, códigos morales muy estrictos), con valores, prácticas y actitudes de una nueva militancia más joven procedente de una sociedad dinámica en proceso de cambio. Estas diferencias no siempre se plasmaban en torno a unas líneas de demarcación claras, pero posteriormente tenderán a delinearse sobre confrontaciones ideológicas (*prosovietismo*-eurocomunismo) o sociológico-culturales (trabajadores manuales-intelectuales, etc.).

Otra debilidad importante del Partido residía en los limitados logros de su política de alianzas, achacables no tanto a los errores propios como a la debilidad de otras organizaciones –que estimulaba su miedo a ser anuladas por la presencia de un PCE mucho más fuerte- o la pervivencia de los prejuicios y los sectarismos de la *guerra fría*. Por eso los comunistas fueron excluidos, por ejemplo, del famoso **Contubernio de Munich** en 1962.

Con todos estos inconvenientes y pese a la hostilidad reiterada de las direcciones en el exilio, finalmente la realidad y las necesidades de las luchas en el interior generaron algunos avances unitarios, aunque limitados, especialmente desde comienzos de los 70, como fue la Mesa Democrática de Madrid (1971), con presencia de PCE, PSOE y algunas personalidades de la oposición moderada. Pero donde la política de alianzas logró éxitos de mayor significación fue en Cataluña. Allí a la pujanza del PSUC se añadía un abanico más diversificada de fuerzas opositoras, junto con otro factor influyente como era, sin duda, el *problema nacional*. Ya en 1956, en su I Congreso, el PSUC catalanizaba su propuesta unitaria llamando a reconstruir una *Solidaritat Catalana* de claras resonancias históricas. En 1966, tras la **Caputxinada**, se constituía la Taula Rodona. Luego vendría la Coordinadora de Forces Politiques de Catalunya y finalmente, en 1971, la Asamblea de Catalunya.

75 años

Nuestra Bandera

1937 ★ 2012



La lucha final... contra la dictadura.

Los años finales del Franquismo constituyen un período de fuerte movilización social, en el que las motivaciones políticas se superponen a los efectos en los trabajadores y los sectores populares de la crisis económica mundial, que ya se dejan sentir en nuestro país. En ese contexto, la actividad del PCE se multiplica, creciendo su organización y su influencia. En 1975, el número de militantes no pasaba de 15.000, pero en el momento de la legalización, en abril de 1977, la cifra se había multiplicado por diez (150.000), y antes de las elecciones del 15 de junio se elevaba a 200.000. Por entonces *Mundo Obrero*, convertido en semanario desde principios de 1976, tiraba alrededor de 150.000 ejemplares. El Partido no conocerá en estos años la sangría de nuevas escisiones, salvo la modesta Oposición de Izquierda (OPI) en 1973, de militancia más estudiantil que obrera. En compensación, un numeroso grupo de Bandera Roja, con presencia esencialmente en Cataluña, se incorporaba en 1974 a las filas del PSUC, donde algunos ya habían militado, aportando algunos cuadros prestigiosos y capaces (Jordi Solé-Tura, Jordi Borja, el carismático líder cristiano Alfonso Carlos Comín).

Entretanto el PCE continuó profundizando su influencia en los diversos sectores, del obrero al profesional, de los barrios a la universidad. Incluso, reconociendo autocríticamente viejos errores e insuficiencias, la II Conferencia Nacional del PCE (1975) lo proclamaba como “Partido de la Liberación de la Mujer”, acercándose a planteamientos feministas que luego se incorporarán más sistemáticamente en el IX Congreso (1978). La estrategia de acoso al régimen estaba clara. Según el Informe de la citada II Conferencia, se estaba desarrollando “una amplio y denso tejido democrático que poco a poco rodea, cerca, estrecha el terreno ocupado por la dictadura y va creándole una situación de asfixia”.

Sin embargo, si bien el PCE vivía, en vísperas de su legalización, una situación de euforia, no por eso dejaban de percibirse algunos síntomas

preocupantes. Santiago Carrillo llegó a alardear, en más de una ocasión, de lo que él consideraba cinco grandes éxitos de la dirección durante la larga noche de la dictadura. Los dos primeros (haber mantenido viva la organización durante la clandestinidad y dejarla sólidamente organizada, y haber incrementando los vínculos con la clase obrera) resultaban más o menos indiscutibles; el PCE era, con mucho, el partido antifranquista más fuerte, y Comisiones Obreras, seguramente el mayor logro de los comunistas, pletórica con el espectacular triunfo en las elecciones sindicales de 1975, se alineaba claramente con la política del Partido, que era ampliamente hegemónico en su seno. El tercer *éxito* (haber elaborado la política de Reconciliación Nacional y forjar así la unidad antifranquista) era sólo cierto en parte, especialmente en los frutos prácticos de esta unidad. También exhibía el Secretario General un cuarto logro, la independencia de Moscú y la contribución a la “renovación del comunismo”, dando en este caso por sentado que el denominado eurocomunismo representaba una innovación teórica y política fundamental. Por último, mencionaba como motivo de orgullo algo que el tiempo no tardaría mucho en cuestionar o matizar: haber sabido evitar los conflictos entre militantes del exilio y el interior y entre las distintas generaciones que convivían en el partido.

El VIII Congreso, celebrado en París en 1972, insistía una vez más en el Pacto para la Libertad y la Huelga Nacional para el derrocamiento del régimen, pero añadía dos cuestiones significativas. La primera, la aceptación del Mercado Común (aunque para democratizarlo y “transformar la Europa de los monopolios en una Europa socialista”), introducía un cambio de política determinado menos por una modificación del análisis sobre la naturaleza del proceso europeísta que por el afán de moderar las posiciones para favorecer el pacto con el resto de la oposición antifranquista. Además de esta muestra de pragmatismo que anunciaba otras muchas, el congreso suscitaba algo que representaba en cierto modo una rectificación de los viejos análisis: el miedo al *centrismo* impulsado por la oligarquía monopolista, capaz de generar cambios seudodemocráticos protagoniza-

dos por sectores reformistas del propio régimen; argumentos que parecían dar la razón a las tesis antaño condenadas de Claudín. Las rectificaciones y adaptaciones no iban a quedar aquí, sino que configuraron, en el período que se extiende hasta la legalización del Partido y las primeras elecciones democráticas, una verdadera revisión de la política diseñada para el post-franquismo.

En el período que sigue al VIII Congreso, el PCE se esforzó en dar alcance político a las movilizaciones obreras y utilizarlas para conjurar el peligro ya entrevisto, cerrando el paso al *continuismo franquista*. También intentó avanzar en la unidad con otras fuerzas, aunque no será hasta julio de 1974, en un momento de deterioro físico del Dictador, cuando pueda presentar su propuesta unitaria de alcance general: la Junta Democrática. La Junta no logró reunir a todas las fuerzas antifranquistas, en la medida en que quedaban fuera siglas y organizaciones de presencia relativamente escasa en la oposición al régimen, pero de indudable respaldo exterior y previsible futuro, como el PSOE, los demócratacristianos y los nacionalistas vascos, que en junio de 1975 creaban la Plataforma de Convergencia Democrática. En la Junta, además del hegemónico PCE con el apoyo de Comisiones Obreras, participaron socialistas seguidores de Tierno Galván (el Partido Socialista Popular) y Alejandro Rojas Marcos, carlistas, el Partido del Trabajo (PT) y algunas personalidades independientes.

El programa de la Junta se articulaba en doce puntos, que incluían la amnistía y las libertades básicas; la formación de un gobierno provisional para establecerlas; la devolución al movimiento obrero del patrimonio sindical; el reconocimiento de la personalidad política de catalanes, vascos y gallegos, y el desarrollo de comunidades regionales; la separación de Iglesia y Estado; un referéndum sobre la forma de gobierno futura, monarquía o república; y la integración de España en la Comunidad Europea. La Junta se constituía, según el PCE, como consecuencia del “auge sin precedentes de la lucha de clases”, ante la patente descomposición del régimen. El nuevo organismo asumió la propuesta de la *acción democrática nacional* para

el derrocamiento de la dictadura. En un Manifiesto por la Reconciliación hecho público meses más tarde (abril de 1975), manifestaba el rechazo al continuismo que suponía la figura de Juan Carlos y abogaba por la *ruptura democrática*. En septiembre de ese mismo año, la I Conferencia Nacional del PCE, celebrada en París, instaba al movimiento obrero a la movilización, pero limitando sus objetivos al cambio político; Carrillo, en su intervención, insistía en no “saltar etapas” rompiendo el frente de fuerzas democráticas, “si no queremos ‘portugalizar’ el caso español”, lo que significaba –gráficamente expresado- no confundir la ocupación de los sindicatos oficiales con la de las fábricas.

Hasta ese momento, con todas las cautelas relativas a la priorización de la alianza interclasista contra el Franquismo, las movilizaciones se planteaban a la ofensiva, pero las cosas comenzaron a cambiar desde comienzos de 1976. Parece que el rey Juan Carlos hizo saber, en diciembre 1975, por persona interpuesta, al Secretario del PCE, su voluntad de democratizar el régimen, pidiendo a cambio paciencia y el fin de los ataques contra la monarquía; Carrillo admitiría posteriormente haber recibido el mensaje, asegurando haberlo rechazado, pero lo cierto es que el comunicado del Comité Ejecutivo de enero de 1976 seguía hablando de ruptura democrática, pero ya no contenía ataques al Rey.

Más significativa resulta la actitud del PCE, en enero de 1976, tendente a rebajar los niveles de la fuerte ofensiva huelguística que sufría el país, y concretamente Madrid. Los argumentos del PCE subrayaban entonces que prolongar la protesta hubiera aislado a la vanguardia, favorecido a los extremistas y provocado enfrentamientos violentos con las fuerzas de orden. Las críticas a la *huelgomanía* comienzan a hacerse frecuente, así como las consigas de usar la fuerza del movimiento obrero, pero controlando sus niveles y sabiendo retirarse a tiempo, para no asustar a los posibles aliados en la lucha contra el Franquismo y transmitir una tranquilizadora imagen de moderación del Partido. Los inconvenientes de esta táctica se apreciarán más tarde, cuando el PCE pierda, al renunciar a la movilización o limitar

su alcance, su principal arma de presión.

En febrero de 1976, Carrillo entraba clandestinamente en España, dispuesto a controlar personalmente la situación. Semanas más tarde, la Junta y la Plataforma se fusionaban en Coordinación Democrática, que ya no era un organismo de confrontación neta sino de negociación, y que no hablaba de gobierno provisional o de “acción democrática nacional”, sino de “acciones y manifestaciones pacíficas” para la legalización de los partidos, la amnistía o la obtención de las libertades. El PCE abandonaba su vieja retórica y sus esquemas anteriores y pasaba a hablar de “ruptura pactada” o llamaba a “la apertura de una negociación a los elementos que se declaran reformistas y a los representantes de las Fuerzas Armadas o la Iglesia” para un gobierno provisional o transitorio.

Como una nueva vuelta de tuerca, tras la huelga del 12 de noviembre convocada por las centrales sindicales, que obtuvo un seguimiento muy apreciable pero inferior a lo esperado, el Comité Ejecutivo celebraba su primera reunión en España, planteando un giro de 180 grados y aceptando jugar en el campo acotado por el gobierno de Suárez. Esta voluntad se refirmaba tras el triunfo gubernamental en el referéndum por la Reforma Política, en el que el PCE, como las demás fuerzas de la oposición, pidió la abstención, pero sin una campaña demasiado intensa. Desde ese momento, la política del PCE abandonó sus viejos esquemas y se limitó, en los meses siguientes, a evitar su aislamiento y conseguir su legalización antes de las futuras elecciones. Para ello, continuó con la *salida a la superficie* de sus militantes y dirigentes, iniciada ya con la presentación pública del Comité Central en Roma, en el verano de 1976.

El 11 de febrero de 1977, el PCE presentaba la documentación en el Ministerio de Gobernación para ser incluido en el Registro de Asociaciones. Aunque el artículo 172 del Código Penal prohibía las organizaciones de obediencia internacional o que pretendieran establecer un régimen totalitario, ni el Tribunal Supremo ni el Fiscal general pusieron objeciones y,

finalmente, el día 9 de abril de 1977 (coincidiendo con el Sábado Santo), el PCE era declarado legal.

La legalización era, evidentemente, el resultado de largos años de lucha abnegada, pero se otorgaba como una concesión llena de cortapisas y cargada de contrapartidas. Para el gobierno de Suárez, pese a la reacción airada de sectores militares y algunos miembros de la casta política franquista, la legalidad del PCE tenía la gran ventaja de legitimar su proceso y evitar conflictos en la próxima contienda electoral, especialmente movilizaciones obreras, que era lo que más temía el gobierno. Pese a las desmesuradas expectativas de Santiago Carrillo, cifradas en una situación *a la italiana*, y frente a las esperanzas legítimamente sustentadas por los militantes de la que había sido principal fuerza antifranquista, las encuestas que Suárez y sus allegado manejaban situaban las cotas de voto del PCE en no más del 10%, previsión luego plenamente confirmada. Seguramente fueron estas circunstancias, más que el reconocimiento a la *madurez* mostrada por el Partido en los funerales de los abogados laboristas de Atocha asesinados por la extrema derecha a fines de enero. los que condujeron a la legalización. Una medida que, en todo caso, llegaba tarde, a sólo dos meses de las elecciones, con la voluntad deliberada de favorecer a otras opciones de la izquierda histórica que pudieran hacer sombra a los temidos comunistas. Y que, además, se producía con unos condicionantes destinados a tener gran relevancia de cara al futuro: el 15 de abril, un Comité Central reunido para la ocasión recibía de boca de Santiago Carillo y asumía –no sin íntimos desgarros- las condiciones previamente aceptadas por su Secretario General en conversación privada con Suárez el 27 de febrero: la aceptación de la bandera y la institución monárquica y de la “unidad de España”. Estas eran las cláusulas de obligado cumplimiento, junto con la aceptación de un “pacto social” para hacer frente a la crisis que poco después se materializaba en los denominados Acuerdos de la Moncloa.

El resultado de las elecciones, pese a los méritos contraídos en la lucha por la democracia y a despecho de las multitudes que acudían a los míti-

nes, resultarían finalmente, como es sabido, sumamente decepcionantes. Mientras el PSOE superaba el 29% de los votos, el PCE apenas conseguía un modesto 9,2%, con sólo 20 diputados; y ello teniendo en cuenta que 8 de los electos correspondían a Cataluña, donde el PSUC duplicaba el porcentaje de su referente estatal.

La Transición y la crisis.

El PCE que alcanzaba por fin la legalidad se definía ahora de acuerdo con un nuevo término, surgido y desarrollado desde 1975 en círculos periodísticos y asumido luego por sus mentores del PCE y otros partidos comunistas de Europa occidental: eurocomunismo. En realidad lo que se ocultaba tras este rótulo respondía al progresivo distanciamiento del partido español y otros con respecto al modelo soviético y al *socialismo real*, manifestado ya con la condena a la intervención en Checoslovaquia y explicitado de manera más intensa sobre todo a partir de 1973, en las críticas del PCE a los regímenes del Este europeo por su carácter *burocrático* y *no democrático*. A la sistematización de las ideas elaboradas desde 1956 se sumaban ahora las enseñanzas extraídas del fracaso de la experiencia chilena de la **Unidad Popular** y de la portuguesa **revolución de los claveles**. La caída de Allende, en la lectura de los hechos por parte del PCE, reforzaba la idea de que no se podía avanzar hacia el socialismo sin una amplia mayoría social, y el caso portugués ilustraba, en opinión de la dirección del PCE, la inoportunidad de *quemar etapas* –como habrían intentado erróneamente los comunistas del país vecino– cuando no existían condiciones para ir más allá de la implantación de una democracia a la manera occidental.

Los principios del llamado eurocomunismo fueron surgiendo en reuniones de diversos partidos occidentales y, en el caso de España, se resumían en un folleto de circunstancias pretendidamente teórico de Santiago Carrillo que llevaba por título *Eurocomunismo y Estado*, publicado en vísperas de las elecciones de 1977. El eurocomunismo se presentaba como

una *tercera vía* entre la socialdemocracia y el modelo soviético y se sustentaba en las ideas de la pluralidad de caminos hacia la transformación social, la *revolución de la mayoría* y la posibilidad de una transición pacífica y gradual, utilizando las instituciones de la democracia parlamentaria. Las referencias a Gramsci e incluso al Lenin crítico de sus últimos años contrastaban con la visión de quienes identificaban la nueva línea con la aceptación en última instancia de tesis socialdemócratas.

Entre los méritos del eurocomunismo, se ha subrayado la voluntad autocrítica de superar los errores en los procesos de construcción del socialismo anteriores y de abrir vías a la transformación social en las condiciones específicas de los países capitalistas avanzados. Entre sus insuficiencias, se han apuntado la ambigüedad y confusión de muchas propuestas e incluso –como afirmaba Manuel Sacristán- la incapacidad para insertar una voluntad crítica positiva en una verdadera dialéctica revolucionaria; en suma, para Sacristán, la vía supuestamente nueva que planteaba era, en definitiva, “la insulsa utopía de una clase dominante dispuesta a abdicar generosamente y una clase ascendente capaz de cambiar las relaciones de producción sin ejercer coacción”.

Sería injusto no valorar lo que de voluntad verdaderamente renovadora había detrás de las propuestas eurocomunistas y su continuidad con las elaboraciones anteriores del PCE desde mediados de los años 50. Pero tampoco puede obviarse, sobre todo para comprender el fracaso final de la propuesta, que el eurocomunismo se utilizó sobre todo para legitimar doctrinalmente la política de consenso de la Transición e incluso para otorgar *respetabilidad* o dar una imagen amable del Partido con fines propagandísticos o electorales. En opinión de Andrade Blanco, reciente estudioso del fenómeno, “visto con perspectiva, da la sensación de que en la práctica el eurocomunismo vino a ser una renuncia a la transformación radical de la sociedad en un momento en el que estos proyectos de transformación radical resultaban inviables a corto plazo, pero una renuncia sublimada sin embargo en una estrategia retórica y especulativa de transición al socialismo

que sirvió, además, para justificar una línea política real muy pragmática y moderada y para poder desarrollarla sin demasiada mala conciencia”.

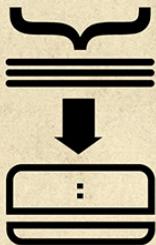
El eurocomunismo se convirtió en seña de identidad ineludible del PCE, especialmente a partir de 1977. Por entonces, pasadas las elecciones y pese a los desalentadores resultados, el balance de la dirección no se caracterizó por su tono autocrítico. A la atribución al miedo y al pertinaz anticomunismo cultivado por la dictadura, se añadió la tesis de los *votos robados* por el Partido Socialista, que volverían tarde o temprano a su destino *natural*. Por tanto, los problemas no eran de ideología o planteamientos políticos sino de imagen o de transmisión de la misma. Para mejorarla ante la sociedad española y para recuperar los sufragios supuestamente *perdidos*, el Comité Central reunido los días 25 y 26 de junio formulaba la que sería propuesta central durante la Transición: la política de concentración democrática, basada en el acuerdo entre las fuerzas parlamentarias y que debía desembocar en un eventual gobierno de coalición para abordar las grandes tareas pendientes del cambio político en el país.

Había, desde luego, una idea básica explícita y un propósito particular implícito detrás de esta propuesta. Por un lado, ante unos resultados electorales que mermaban seriamente la capacidad de influencia del Partido, se consideraba que esta política era la única que podía llevar a la clase obrera a posiciones de poder y ayudar a modificar la hegemonía de las fuerzas oligárquicas; de hecho, se presentaba, además, como continuación del Pacto para la Libertad. Por otra parte, la aplicación práctica suponía una aproximación a UCD, el partido de Suárez, aislando al PSOE y recuperando por esa vía votos y protagonismo para el PCE.

Desde luego, no parecía fácil contrarrestar con este tipo de maniobras políticas lo que las urnas y el contexto general del cambio postfranquista habían determinado. El primer intento se produjo con los Pactos de la Moncloa (octubre de 1977), rubricados por el gobierno y los partidos parlamentarios, aunque el PCE arrastraría y comprometería en su apoyo

DESCARGA ESTA PUBLICACIÓN

Download this Issue



He munches with the same persistent stare,
He knows his way with women (and that's that!)
Impertinently tilting back his chair
And dropping cigarette ash on the mat.

The time is now propitious, as he guesses,
The meal is ended, she is bored and tired;

a Comisiones Obreras. El acuerdo incluía medidas económicas contra la crisis (congelación de salarios, reducción del gasto público, restricción del crédito, aumento de la presión fiscal), así como reformas en la educación y la seguridad social, entre otras. Para el PSOE, que mostró escaso entusiasmo, se trataba de un intento de alianza entre Suárez y Carrillo para marginar a los socialistas. Suárez, cuya idea es, obviamente, la que acabó predominando, concebía los Pactos como un plan económico de austeridad con alguna contrapartida política que asegurara la paz social en la etapa de transición.

La visión del PC era bien distinta, ya que los entendía como un pacto político de contenidos económicos, base operativa del posible gobierno de concentración por el que abogaba. Luego, el Partido se convirtió en el principal defensor del acuerdo, vinculándolo a la consolidación de la democracia e incluso llegando a afirmar que creaba las condiciones para el advenimiento de la democracia política y social. Dado que, en definitiva, se cumplieron fundamentalmente las cláusulas económicas, que eran las más lesivas para los trabajadores, el malestar obrero fue utilizado contra los Pactos y la política de la dirección, y la firma del acuerdo se convirtió para muchos en un ejemplo de claudicación.

También el debate de la Constitución el PCE mantuvo una actitud basada en la idea de consenso y aproximación a otras fuerzas parlamentarias, sobre la base de la prioridad de la consolidación de la democracia. Ni siquiera se planteó, por deseo expreso de Carrillo, un voto republicano testimonial. El Partido llamó a la votación positiva al nuevo texto argumentando que, aunque en algunos aspectos no respondía a sus concepciones, permitía una interpretación flexible y abierta.

Entretanto, tenía lugar el primer gran conflicto interno en el PCE, en relación con el abandono de la definición leninista del mismo. El anuncio de tan significativo y simbólico cambio la haría Santiago Carrillo durante un viaje a Estados Unidos, en noviembre de 1977. Con el personalismo

que caracterizó su actuación en estos años y sin previo conocimiento del resto de la dirección, el Secretario General anunció la propuesta durante su estancia en Washington, señalando más tarde que el leninismo ya no podía considerarse “el marxismo de nuestra época”.

El asunto se discutió, eclipsando a los restantes temas, en el IX Congreso, celebrado en Madrid en abril de 1978. Previamente, fue objeto de un intenso debate, con posiciones muy encontradas en lugares como Madrid, Asturias y Cataluña. En Asturias, la controversia se saldó, en la conferencia preparatoria celebrada en la localidad de Perlora a finales del mes de marzo, con la retirada de más de un centenar de delegados, dentro de un bloque heterogéneo en el que predominaban intelectuales y profesionales, y frente a los cuales la dirección esgrimió, como factor de cohesión y fidelidad, un claro obrerismo. En Cataluña, las posiciones favorables al mantenimiento del término en la definición del Partido fueron mayoritarias, hasta el punto de que el dirigente catalán Francisco Frutos sería el encargado en el congreso de Madrid de defender esta postura, argumentando que el leninismo era garantía de la continuidad revolucionaria y no resultaba incompatible con el eurocomunismo o la vía democrática al socialismo.

Finalmente, en el congreso, por 965 contra 248 votos, el PCE pasaba a definirse como “marxista, revolucionario y democrático”. La asamblea reconocía además el fracaso de la política elaborada por el PCE para llegar a la democracia, pero achacaba la responsabilidad al resto de fuerzas de la oposición y seguía abogando por la política de concentración democrática. La realidad había rebajado el orgullo militante de un PCE que ya no podía considerarse –en palabras de Simón Sánchez Montero- *El* partido sino *un* partido más de la clase obrera. Esta constatación, cierto descontento por los cambios organizativos (con la supresión de las agrupaciones sectoriales) y, en general, el descenso en las cifras de militantes (en un año se había pasado de 201.000 a 171.000) no parecía hacer mella en el optimismo de la dirección, ya que, en noviembre de 1978, se iniciaba el ensayo de convertir al semanario *Mundo Obrero* en diario, operación que a los pocos meses se evidenciaba ruinosa.

En marzo y abril de 1979 se celebraron nuevas elecciones generales y municipales, que reflejaron para el PCE una cierta estabilización con ligeros incrementos. En las primeras, el Partido crecía en unos 20.000 votos, que suponían un 1,5% más de sufragios y 3 diputados adicionales. Las municipales, afrontadas bajo el lema “quita a un cacique y pon un alcalde”, arrojaban para el PCE el control de una única capital de provincia (Córdoba), un apreciable número de concejales y unas votaciones del 13% en los municipios de más de 20.000 habitantes, dando lugar a un *pacto de izquierdas* en los ayuntamientos y eventualmente a co-gobiernos con el PSOE.

Tras las elecciones, la política de concentración del PCE no experimentó cambios sensibles, aunque la situación del país sí los estaba sufriendo. UCD, el interlocutor esencial de las propuestas convergentes del PCE, se derechizaba y se desgarraba internamente, mientras el PSOE llevaba a cabo su proceso de reconversión modernizadora (abandono del marxismo) y aproximación a las *clases medias* con el fin de propiciar su acceso al gobierno. Todavía en 1979 la dirección comunista se opuso radicalmente a la intención de Comisiones Obreras de convocar una huelga general por el deterioro de las condiciones de los asalariados y contra el Estatuto de los Trabajadores. El X Congreso, celebrado en julio de 1981, unos meses después del intento de golpe de 23-F, con unas cifras de militancia en caída libre (quedaban sólo 84.500 afiliados al PCE y 8.000 en el PSUC), reafirmaba la vigencia del eurocomunismo y culpaba de nuevo a las demás fuerza de haber debilitado la democracia por no haberse seguido la política preconizada por el PCE. A la vez, planteaba la unidad de la izquierda –ante un PSOE poco dispuesto a recoger ese guante– y aludía, casi por primera vez, al papel de los nuevos movimientos sociales.

Entretanto, el Partido había entrado en una dinámica autodestructiva de efectos demoledores. Las crisis del PSUC y del EPK (el Partido Comunista de Euskadi) y la de los llamados *renovadores* fueron los ingredientes fundamentales de un conflicto que acabó por reducir a su mínima expresión al gran partido del antifranquismo.

La crisis del PSUC, que incidía sobre problemas y tensiones nunca del todo resueltas –por ejemplo en la autonomía del partido catalán con respecto al PCE– se revistió de un fuerte cariz ideológico, dividiéndose el partido en tres tendencias: la eurocomunista, próxima a las posiciones dominantes en el PCE; la denominada *prosoviética*, de base esencialmente obrera y de predicamento entre muchos veteranos, para la cual el eurocomunismo significaba una renuncia a las señas de identidad comunistas y una regresión a posiciones socialdemócratas; y los llamados *leninistas*, algo menos numerosos y definidos y de base más intelectual, para los cuales el eurocomunismo tenía algunos elementos interesantes, pero era poco riguroso y se usaba sobre todo como forma de ofrecer una imagen amable del Partido ante la sociedad.

El PSUC era, con diferencia, la sección más fuerte del comunismo español. En 1977 superaba en mucho el porcentaje de voto del PCE y, aunque en las elecciones generales de 1979 experimentó un ligero retroceso, todavía en las celebradas para el primer parlamento autonómico en 1980 obtuvo un 18,68% de los votos. Sin embargo los síntomas de crisis interna se dejaban sentir ya en el descenso de militancia, que de la cifra de 40.000 afiliados en 1977 pasó a sólo 21.000 en 1980, en vísperas de su V Congreso; en este mismo período, la edad media de los militantes se incrementó desde los 30 a los 43 años.

El conflicto del PSUC con la dirección del PCE se fue gestando durante la preparación del V Congreso y estalló en el transcurso del mismo (enero de 1981). A las críticas que contenían los documentos en debate a la política de concentración democrática y a los Pactos de la Moncloa, y a la reafirmación de la autonomía del PSUC, se añadió en el congreso, como detonante, una decisión de alta dimensión simbólica: el abandono del eurocomunismo. Mediante una alianza circunstancial de prosoviéticos y leninistas, se sustituyó el término *eurocomunismo* por el de *revolución de la mayoría*. Los dimitidos Secretario General (Antoni Gutiérrez) y Presidente del Partido (Gregorio López Raimundo) fueron sustituidos respectivamente

te por el *leninista* Francisco Frutos y el *prosoviético* Pere Ardiaca. El resultado provocó tal conmoción que, al poco tiempo, hubo de ser rectificado, tras la ruptura de la alianza entre leninistas y prosoviéticos, primero por los órganos de dirección y la Conferencia Nacional del Partido, y luego por un congreso extraordinario, que consumó, en 1982, la escisión: los prosoviéticos se separaron del PSUC, en marzo de 1982, creando el Partido de los Comunistas de Cataluña, mientras la organización madre quedaba sumida en una profunda crisis, con no más de 7.500 militantes tras su VI Congreso, desplomándose estrepitosamente en las elecciones de octubre de ese mismo año.

La segunda crisis tuvo lugar en el País Vasco, un territorio donde los comunistas no habían logrado, desde 1977, buenos resultados, con un espacio electoral disputado no sólo por el PSOE sino también por el nacionalismo de izquierdas. Precisamente fue el intento del nuevo equipo dirigente, encabezado por Roberto Lertxundi, de llegar a un acuerdo de unificación con un sector de ese nacionalismo, lo que provocó el choque con la dirección del PCE y la fractura y escisión del EPK, toda vez que la fuerza resultante de la fusión no asumía ni el eurocomunismo como seña de identidad ni la vinculación directa con el PCE.

El problema del EPK repercutió a su vez en un tercer frente de conflicto, que era el de los llamados *renovadores*. Este sector, mayoritariamente integrado por intelectuales y profesionales liberales, había asumido el eurocomunismo de manera convencida e incluso entusiasta, pero deseaba su profundización y, además, reclamaba cambios en la organización del Partido acordes con esta ideología, en un sentido federalista y democratizador, acabando con el centralismo democrático, que consideraba superado. Los renovadores, que contaban entre sus adeptos con algún veterano (Azcárate) y muchos dirigentes conocidos y cargos públicos (Pilar Bravo, Zaldívar, Mangada, Adolfo Tejero, etc.) iniciaron su ofensiva en 1980. No consiguieron, sin embargo, hacer triunfar sus tesis de federalización del Partido y reconocimiento del derecho de tendencia en el X Congreso,

y unos por sanciones (por ejemplo, tras apoyar, en actitud de desafío, un acto público de Lertxundi en Madrid), y otros por cansancio o motivos personales, fueron en muchos casos abandonando el Partido en los años siguientes; y dando la razón aparentemente a la dirección del PCE, que los acusaba de socialdemócratas, no fueron pocos los que recalaron en el PSOE o sus aledaños.

.Los tres procesos mencionados fueron, sin duda, los más relevantes, dentro de una crisis generalizada que afectó al PCE y que requiere, sin duda, una explicación compleja, de causas múltiples. En ella se mezclaban la acumulación de problemas diversos con una gestión inadecuada, autoritaria y muy personalizada de los mismos. El telón de fondo era, sin duda, el fracaso en las expectativas que generó el fin de la dictadura, hegemonizado por los sectores reformistas del régimen franquista y con un marco ulterior resultante sumamente restrictivo para las posibilidades de los comunistas.

La frustración de la militancia encontró en esta situación un caldo de cultivo más que adecuado. La épica de la resistencia dio paso al predominio de la política institucional, y la estrategia de la dirección (actividad muy *cupular*, obsesión por los acuerdos políticos en la línea de la *concentración*, moderación y pragmatismo) fomentó aún más la desmovilización y el descontento de las bases. La amputación de las propias señas de identidad del Partido (bandera, republicanismo, incluso para muchos la vinculación a la tradición del Octubre ruso...) en aras del pragmatismo o la renovación, contribuyó a aumentar el malestar, toda vez que, además, estas renunciaciones no eran compensadas con éxitos apreciables en el terreno político-electoral. Al entierro del proyecto rupturista y la agresión a los símbolos y elementos identitarios de la vieja militancia, se añadieron otros ingredientes que afectaban a sectores particulares, como los intelectuales y profesionales, desocontentos por un funcionamiento del Partido que primaba la política personalista del Secretario General y por una presencia a su juicio excesiva de la *vieja guardia* retornada del exilio. Tampoco cabe olvidar que muchos de estos profesionales se consideraban desaprovecha-

dos en una opción política con escaso futuro a corto plazo, a tenor de lo sucedido en la Transición, y buscaban nuevos horizontes; o que muchos trabajadores golpeados por la crisis sintieron que su Partido había abandonado el espíritu de lucha de los viejos tiempos.

Todos estos elementos y seguramente algunos más se conjugaron, focalizando muchas veces en el eurocomunismo y la política seguida durante la Transición la mayoría de los descontentos. La gestión que la dirección –y muy especialmente el entonces omnipotente Secretario General- hicieron de la crisis, no pudo ser más desafortunada. Existía sin duda en el Partido una amplia diversidad ideológica y de culturas políticas, fruto de las diferencias de generaciones, extracción social y experiencias militantes. En el nuevo contexto, esta pluralidad ideológica se volvió explosiva, y los mismos debates (como el del leninismo) adquirieron un fuerte tono simbólico e identitario; por utilizar este ejemplo, a menudo no se discutía la adecuación del leninismo a los nuevos tiempos, sino si el Partido seguía siendo o no revolucionario. En vez de gestionar estas diferencias buscando la unidad sobre la base de acuerdos programáticos o líneas de intervención política, Carrillo comenzó a plantear, cuando surgieron los conflictos, la *homogeneización* del Partido, usando el eurocomunismo –redefinido según las circunstancias y aplicado hasta en las pequeñas escaramuzas- como arma arrojadiza y elemento ideológico-identitario; así, en palabras de Andrade Blanco, “la dirección vino a apagar el fuego de la diversidad con la gasolina del eurocomunismo”.

El resultado de todo ello supuso que el Partido, que ya se desangraba por dentro, en medio de estas batallas con fuerte proyección externa, se desacreditara ante los electores y la sociedad. El primer aviso llegó con el retroceso electoral en las elecciones andaluzas, en mayo de 1982, que generó el primer amago de dimisión de Santiago Carrillo. En octubre de 1982, en las elecciones generales de la victoria clamorosa del PSOE, el PCE quedó reducido a un 3,8% de los votos y a sólo 4 diputados.

Analizar lo sucedido posteriormente requeriría una visión más pormenorizada de la que puede ofrecerse en unas pocas líneas, y nos sitúa ya ante la realidad actual del PCE. La obligada cesión del poder de Santiago Carrillo, sustituido por Gerardo Iglesias, dio paso a modelos de dirección más colectivos, pero no acabó con los problemas, agravados incluso con nuevas escisiones: la del *prosoviético* Partido Comunista de los Pueblos de España encabezado por Ignacio Gallego y la del que finalmente se denominó Partido de los Trabajadores de Santiago Carrillo. Una tímida recuperación, con la reacción contra las políticas antisociales del gobierno de Felipe González y la campaña contra la entrada en la OTAN, condujo a la formulación de una propuesta de convergencia con las fuerzas a la izquierda del Partido Socialista, que desembocó en la creación de Izquierda Unida.

Desde 1982, el PCE fue introduciendo en sus análisis algunos elementos de autocrítica con respecto a la política seguida en los años de la Transición, pero nunca suscitó, sobre esta etapa de su pasado, un debate amplio y profundo, que aún sigue pendiente. En 1990, con motivo del 70º aniversario de la fundación del Partido, el Secretariado, encabezado por Julio Anguita, criticaba las “limitaciones de la democracia interna” que “impidieron la convivencia interior de sensibilidades plurales” dentro del Partido en esos años decisivos, así como el “tacticismo con que se desarrolló el proyecto político”, la “extensión de los pactos más allá de lo necesario” y la consiguiente pérdida de autonomía.

Izquierda Unida logró inicialmente contener la hemorragia de votos y luego remontar, desde finales de los años 80 y en la década de los 90, pero fue a la vez configurándose orgánicamente de una manera cada vez más estructurada, alejándose del modelo de mera coalición que tuvo en sus orígenes. Fue entonces cuando, en el contexto de la crisis terminal de los regímenes del bloque soviético y del supuesto “fin del comunismo”, IU se debatió en el dilema de representar un punto de convergencia en una política de alianzas inicialmente diseñada por el PCE, o bien reemplazar al propio PCE dentro de un proceso de reconversión post-comunista. Esta

segunda perspectiva se hizo posible a medida que el PCE iba transfiriendo tareas y competencias a IU, hasta el punto de que parecía perder su razón de ser como partido independiente. Sin embargo, quienes apostaban por la disolución del PCE perdieron la batalla en el XI Congreso (1991), en que sus tesis fueron derrotadas, aunque luego continuaron el combate en IU a través de la denominada Nueva Izquierda en los años siguientes, sin mayor éxito que el de debilitar a la coalición o, más bien, a lo que ya se definía como movimiento político-social.

Entretanto, el PCE iniciaba el lento y trabajoso proceso de recuperación orgánica y competencial que conduce al PCE actual. Un partido que, según lo aprobado en sus recientes congresos, pretende coexistir con un proyecto de convergencia más amplio (IU) sin abdicar de las funciones propias de una organización comunista en el complejo mundo del siglo XXI, y sin perder de vista el objetivo de transformación social que dio sentido a su historia y sigue dándosele a su misma existencia.

glosario



CAPUTXINADA / CAPUCHINADA. Encierro estudiantil, en marzo de 1966, en el convento barcelonés de los capuchinos, convocado por el Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona (SDEUB). Asistieron más de 500 estudiantes, algunos intelectuales, sacerdotes y hasta observadores extranjeros. Acabó con la disolución policial y la imposición de fuertes multas a muchos de los participantes. Tuvo una gran repercusión pública.

CONTUBERNIO DE MUNICH. Denominación despectiva dada por el régimen español a la reunión organizada por el Movimiento Europeo en esta ciudad alemana entre el 5 y el 8 de junio de 1962, en pleno período de las huelgas mineras asturianas. Asistieron representantes, procedentes del interior y el exilio, de las fuerzas opositoras al Franquismo, con la excepción de los comunistas, que no fueron invitados. Muchos de los delegados, a su regreso a España, fueron encarcelados o confinados.

JURISDICCIONES ESPECIALES. Bajo el régimen franquista, los delitos por actividades políticas y sindicales no eran juzgados por los tribunales ordinarios, sino por tribunales especiales, como el de Actividades Extremistas que dirigía el coronel Eymar desde 19658 o el Tribunal de Orden Público desde 1964. Los abogados y juristas demócratas reclamaban su desaparición.

ORGANIZACIÓN SINDICAL ESPAÑOLA (OSE). Organismo del régimen franquista destinado al encuadramiento obligatorio y al control de los trabajadores. Los comunistas y algunos otros grupos de la oposición antifranquista practicaron la infiltración en su seno (el *entrismo*) para poder impulsar más eficazmente la lucha de los trabajadores, utilizando los cargos electivos de la misma (jurados y enlaces).

PLAN DE ESTABILIZACIÓN. Conjunto de medidas aprobadas en 1959 por el gobierno franquista, aunque precedidas de otras puestas en en marcha desde 1957, que marcan el paso definitivo de la política de autarquía o más cerrada del primer Franquismo a la liberalización, los planes de desarrollo y la aproximación al capitalismo europeo en los años 60. Sus efectos económicos provocaron un aumento de la conflictividad social.

PRIMAVERA DE PRAGA. Proceso de reforma política en Checoslovaquia, iniciado con los cambios en la dirección del gobernante Partido Comunista, que pretendía construir un “socialismo de rostro humano” de base pluralista. Fue interrumpido en agosto de 1968 con la entrada en el país de las tropas de la URSS y sus aliados del Pacto de Varsovia, provocando una fuerte división en el movimiento comunista internacional y la protesta de muchos partidos comunistas, entre ellos el español.

REVOLUCIÓN DE LOS CLAVELES. Proceso iniciado en Portugal el 25 de abril de 1974 por el Movimiento de las Fuerzas Armadas, que acaba con la dictadura e inicia un período de radicalización revolucionaria, con nacionalizaciones, reforma agraria y una fuerte movilización obrera y popular. Tras el anuncio incluso de una “transición al socialismo”, el movimiento fue reconducido, tras el triunfo de los sectores más moderados del mismo, hacia un democracia liberal de tipo occidental.

SOLIDARIDAD CATALANA / SOLIDARITAT CATALANA. Coalición electoral creada en 1906, entre distintas fuerzas políticas, desde los nacionalistas a grupos republicanos, contra la llamada Ley de Jurisdicciones, que confería a los tribunales militares la competencia de juzgar los delitos contra la unidad de la patria, y se dirigía muy especialmente contra el catalanismo. El PSUC intentó reutilizar este nombre para una alianza en defensa de los *derechos nacionales* de Cataluña.

UNIDAD POPULAR CHILENA. Coalición de partidos de izquierda (incluidos los socialistas y comunistas) y centro-izquierda que, en enero de 1970, lleva a la presidencia de la República al socialista Salvador Allende. Se iniciaba así una experiencia de transición democrática al socialismo que encontró feroces resistencias en la derecha y que fue aplastada por el golpe militar encabeza por Pinochet el 11 de septiembre de 1973, con el apoyo del gobierno norteamericano.

bibliografia



General.

ANDRADE BLANCO, Juan Antonio: *El PCE y el PSOE en la Transición. La evolución ideológica de la izquierda durante el cambio político*. Madrid, Siglo XXI, 2012.

BUENO, Manuel; HINOJOSA, José; GARCÍA, Carmen (coords.): *Historia del PCE. I Congreso 1920-1977*. Vol. I. Madrid, FIM, 2007.

BUENO, Manuel, y GÁLVEZ, Sergio (eds.): “Nosotros los comunistas”. *Memoria, identidad e historia social*. Madrid, FIM / Atrapasueños, 2009.

MORÁN, Gregorio: *Miseria y grandeza del Partido Comunista de España 1939-1985*. Barcelona, Planeta, 1986.

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Jesús: *Teoría y práctica democrática en el PCE (1956-1982)*. Madrid, FIM, 2004.

TREGLIA, Emanuele: *Fuera de las catacumbas. La política del PCE y el movimiento obrero*. Madrid, Eneida, 2012.

VARIOS AUTORES: “Estrategias de alianzas y políticas unitarias en la historia del PCE”, en *Papeles de la FIM*, n° 24, 2ª época, 2006.

Otros estudios históricos.

ABAD BUIL, Irene: *En las puertas de prisión. De la solidaridad a la concienciación política de las mujeres de los presos del franquismo*. Barcelona, Icaria, 2012.

ERICE, Francisco (coord.): *Los comunistas en Asturias, 1920-1982*. Gijón, Trea, 1996.

MOLINERO, Carme, e YSÀS, Pere: *Els anys del PSUC. El partit de l'antifranquisme (1956-1981)*. Barcelona, L'Avenç, 2010.

PALA, Giaime, y NENCIONI, Tommaso (eds.): *El inicio del fin del mito soviético. Los comunistas occidentales ante la Primavera de Praga*. Barcelona, El Viejo Topo, 2008.

SANTIDRIÁN ARIAS, Víctor Manuel: *Historia do PCE en Galicia (1920-1968)*. Coruña, Ediciós Do Castro, 2002.

TREGLIA, Emanuele (ed.): “Expediente: Eurocomunismo”, en *Historia del Presente*, Madrid, nº 18, 2011, pp. 5-66.

VARIOS AUTORES: *Contribuciones a la historia del PCE*. Madrid, FIM, 2004.

VINYES, Ricard: *Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas*. Madrid, Temas de Hoy, 2002.

ZARAGOZA FERNÁNDEZ, Luis: *Radio Pirenaica. La voz de la esperanza antifranquista*. Madrid, Marcial Pons, 2008.

Biografías, memorias y testimonios.

ANA, Marcos: *Decidme cómo es un árbol. Memorias de la prisión y la vida*. Barcelona, Umbriel, 2007.

ASENJO, Mariano, y RAMOS, Victoria: *Malagón. Autobiografía de un falsificador*. Barcelona, El Viejo Topo, 1999.

AZCÁRATE, Manuel: *Derrotas y esperanzas. La República, la Guerra Civil y la Resistencia*. Barcelona, Tusquets, 1994.

CAMACHO, Marcelino: *Memorias. Confieso que he luchado*. Madrid, Temas de Hoy, 1990.

CARRILLO, Santiago: *Memorias*. Barcelona, Planeta, 1993.

CLAUDÍN, Fernando: *Documentos de una divergencia comunista*. Barcelona, El Viejo Topo, 1978.

CLAUDÍN, Fernando: *Santiago Carrillo: crónica de un Secretario General*. Barcelona, Planeta, 1983.

CUEVAS, Tomasa: *Testimonios de mujeres en las cárceles franquistas*. Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2004.

FALCÓN, Irene: *Asalto a los cielos. Mi vida con Pasionaria*. Madrid, temas de Hoy, 1996.

LASO PRIETO, José María: *De Bilbao a Oviedo pasando por el penal de Burgos*. Oviedo, Pentalfa, 2002.

LÓPEZ, Manolo: *Mañana a las once en la Plaza de la Cebada*. Añlbacete, Bomarzo, 2009.

NÚÑEZ, Miguel: *La revolución y el deseo. Memorias*. Barcelona, Península, 2002.

PRESTON, Paul: *El zorro rojo. La vida de Santiago Carrillo*. Barcelona, debate, 2013.

SÁNCHEZ MONTERO, Simón: *Camino de libertad. Memorias*. Madrid, Temas de Hoy, 1997.

SANDOVAL, José: *Una larga caminata. Memorias de un viejo comunista*. Sevilla, Muñoz Moya- FIM, 2006.

SOLÉ TURA, Jordi: *Una historia optimista*. Madrid, Aguilar, 1999.



índice

5 / El giro táctico de 1956 y la Política de Reconciliación Nacional.

13 / El Partido del antifranquismo.

25 / La lucha final... contra la dictadura.

31 / La Transición y la crisis.

45 / Glosario.

49 / Bibliografía.



Los editores le quedarán muy agradecidos si nos comunica n la opinión sobre el material contenido en este cuaderno, así como su presentación e impresión. Les agradeceríamos también cualquier otra sugerencia.

Nuestra Dirección:

Partido Comunista de España
C/ Olimpo 35, 28043,
Madrid, España



Comité Federal
Secretaría de Formación